

Con fecha 19 de octubre de 2021 tuvo entrada en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Sanidad solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por [REDACTED] solicitud que quedó registrada con el número 001-061763:

.....Estadística del número total de partos inducidos, partos con episiotomía, partos instrumentales y número total de partos en cada hospital del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde 2010 según el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (RAE-CMBD). Solicito la información desglosada por hospital y año....

Con la misma fecha esta solicitud se recibió en la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

De acuerdo con la letra k) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

Por otra parte, según el artículo 16 de la misma Ley 19/2013 en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.

Con base en lo anterior se señala que el envío de información por parte de los hospitales al RAE_CMBD se efectúa bajo el régimen que dispone la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública ya que la explotación del mencionado registro forma parte del conjunto de operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional. Concretamente, el artículo 10 de la citada Ley establece que tanto personas físicas como jurídicas (en este caso hospitales) están obligadas a proporcionar la información con fines estadísticos y al hacerlo su identidad queda protegida. Dicha protección está contemplada en el artículo 11, por el que se regula el secreto estadístico, definido a su vez en el artículo 13 del Capítulo III de dicha ley. Este artículo recoge en su punto 1 que "Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas". Añadiendo, en el punto 2 de dicho artículo, que "Se entiende que son datos personales los referentes a personas físicas o jurídicas que o bien permitan la identificación inmediata de los interesados, o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de los mismos".

En los términos indicados por el propio Instituto Nacional de Estadística respecto del secreto estadístico que regula esta Ley, se indica que éste obliga incluso a no publicar informaciones con mucha desagregación para evitar la posible identificación del informante, ofreciendo garantías a



las unidades informantes de que los datos obtenidos o cedidos por éstas, serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico.

Una vez analizada la solicitud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14.1 letra k), 14.2 y 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, **se deniega el acceso** a la información desglosada por hospitales y **se concede acceso** a la información estadística y a los indicadores con desagregación por comunidad autónoma para hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, información que se adjunta a la presente resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Firmado electrónicamente
EL SECRETARIO GENERAL DE SALUD DIGITAL,
INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SNS

Juan Fernando Muñoz Montalvo

CSV : [REDACTED]

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : [REDACTED]

FIRMANTE(1) : JUAN FERNANDO MUÑOZ MONTALVO | FECHA : 12/11/2021 12:02 | Sin acción específica

